

Este texto es la reedición de un artículo que apareció en Cuadernos de Marcha en agosto de 1999, pocos meses antes de que tuvieran lugar las primeras elecciones nacionales con el sistema electoral que rige actualmente y que se aprobó el 8 de diciembre de 1996.

El dilema de los partidos tradicionales

Martín Peixoto

En una entrevista concedida a la revista Tres del nueve de marzo del corriente año, el senador Bouza se expresó de este modo: “La gestión del Partido Colorado en el gobierno ha sido bastante eficiente; sin embargo uno no nota una adhesión intensa, y yo creo que esto es consecuencia de que la gente colorada se siente lejos del partido”.

El comentario refleja bastante fidedignamente el dilema en que se hallan los partidos tradicionales desde hace más de diez años: la gestión “eficiente” de los sucesivos gobiernos de ambos partidos no se ha reflejado en un incremento de su caudal de votos. Por el contrario, éste ha ido disminuyendo en beneficio de la izquierda por razones que no se terminan de comprender totalmente.

Como consecuencia de ello, tanto los blancos como los colorados asumieron mayoritariamente una visión pesimista sobre nuestro sistema político, que hasta entonces había sido privativa de la izquierda, y renunciaron a algunos de sus postulados constitutivos. El resultado ha sido que, en lugar de detener y revertir el proceso que se menciona arriba, contribuyeron a acentuarlo.

Guerra de trincheras

Quisiera enumerar algunos ejemplos. Hace algunos años se instaló la idea de que nuestro sistema político era una máquina de fabricar empates. En aquel momento opiné que los empates no eran consecuencia de las leyes electorales ni de mecanismos institucionales que los producían, sino reflejo de la voluntad de los electores). Esta había sido una de las constantes de nuestro sistema político; los electores jamás le concedieron a nadie una mayoría absoluta.

La alusión a los empates y la imposibilidad de gobernar (que los hechos de la última década no avalan), tuvieron el efecto adverso de corroborar la visión tradicional de la izquierda acerca de las “grandes transformaciones”, de las “grandes mayorías” necesarias para gobernar, y contribuyeron a desacreditar dos de los pilares de la democracia representativa: las mayorías ocasionales y la búsqueda de consensos que traspasen la frontera de los partidos. La reforma electoral plasmó esta idea al introducir el mecanismo del ballottage para la elección del presidente.

Otro tema donde los partidos tradicionales asumieron la opinión de la izquierda fue la visión negativa sobre el fraccionamiento de los partidos y del sistema electoral que supuestamente lo fomentaba (para la izquierda los partidos tradicionales sólo se conservaban unidos por la denostada “Ley de Lemas”). De la noche a la mañana, un puñado de líderes blancos y colorados comenzaron a quejarse de que sus propios partidos eran indisciplinados y amorfos -los datos empíricos indicaban lo contrario-, y que el fraccionamiento dispersaba sus fuerzas. Involuntariamente se terminó apuntalando la opinión de la izquierda de que el sistema electoral estaba armado para que triunfaran candidatos con escaso apoyo electoral propio gracias a una ingeniería tramposa, y no a una sintonía real entre las fracciones de los partidos. A ello se le suma un sentimiento indisimulado de vergüenza de dirigentes de ambos partidos hacia los clubes políticos, que han ido desapareciendo (tradicionalmente la izquierda los consideró mecanismos para la repartición de empleos públicos a cambio de votos -distintos de los comités de base, creados para concientizar y movilizar a las bases-; con ello olvidaba -u omitía- que una de las tareas históricas del Parlamento ha sido precisamente darle cauce a las peticiones de los ciudadanos particulares, y que los clubes políticos cumplían las funciones de antecámara parlamentarias). Una de las consecuencias fue que los partidos tradicionales perdieron Montevideo y no la pudieron recuperar, como si se tratara de un bastión inexpugnable entregado para siempre. Llama la atención que no le disputen al Frente los barrios periféricos de la capital, lo que indica que tal vez perdieron su capacidad para dialogar con los sectores más necesitados.

Por último, vencidos por el temor de que el Frente llegara al gobierno, terminaron adoptando una visión dual de la política que no deja espacio a terceras posiciones, similar a la que postula el núcleo más duro de la izquierda.

Un buen ejemplo del creciente sentimiento de polarización que invadió a blancos y colorados es lo que ocurrió cuando Juan Andrés Ramírez declaró que no sabía si en una segunda vuelta le otorgaría su voto al candidato colorado (Ramírez se refería a las opciones que ofrecía la reforma electoral y no a sus preferencias particulares: “No debemos aislar a nadie de entrada”). El 11 de marzo Búsqueda publicó lo siguiente: Las afirmaciones de Ramírez lo dejaron enfrentado a la mayoría de los líderes de los partidos políticos que lo responsabilizaron por (...) olvidar que el Frente Amplio es el principal adversario de las colectividades históricas (...) A Volonté le “sorprende” que Ramírez pueda pensar que hubiera alguna hipótesis que implique darle el apoyo al Frente Amplio, que durante estos años fue implacable con el gobierno blanco y con el gobierno de coalición (...) El orientador de Propuesta Nacional, Álvaro Ramos, declaró que las manifestaciones de Ramírez son “un error” porque Vázquez es el adversario y en eso “no hay que confundirse”. Por su parte, Gonzalo Aguirre sostuvo que “ningún blanco lo seguiría (a Ramírez) si en algún momento sugiriera hacerlo”. En opinión de Hierro “un gobierno de Tabaré Vázquez puede significar un peligro institucional para el Uruguay”. De acuerdo a la información de Búsqueda, el intendente de Canelones, Tabaré Hackembruch, convocó a blancos y colorados a votar en las próximas elecciones para “salvar la libertad y la democracia” que, dijo, serían afectadas por un gobierno del Frente Amplio (...) El lunes 8 el ministro de Educación y Cultura, Yamandú Fau, declaró a El Espectador que en los primeros comicios (después de la reforma) la opción será entre la “democracia liberal y tolerante” de los partidos tradicionales y la confrontación radicalizada e intolerante del Frente Amplio.

La razón del artillero

Esto que se narra aquí son las reacciones que se dispararon cuando uno de los líderes más destacados de los blancos se salió del libreto. Hasta entonces, los argumentos en favor de la reforma habían sido algo más cautelosos. Por ejemplo, se dijo que se le quería dar más legitimación al Poder Ejecutivo: un presidente elegido por más del cincuenta por ciento de los votos contaría con un respaldo más sólido para emprender reformas. Sin embargo el argumento es flojo dado que el Parlamento se seguirá conformando de acuerdo a la representación proporcional y, salvo que el partido o la coalición de gobierno obtengan la mayoría parlamentaria (algo que no tiene que ocurrir necesariamente), el presidente electo por más del cincuenta por ciento de los votos deberá buscar los mismos consensos que necesitaron sus antecesores bajo la vieja ley electoral.

Por otra parte la Constitución le asigna un papel muy importante al Parlamento en el proceso de toma de decisiones. Quienes debían saberlo parecen ignorarlo: el senador Bouza declaró a la revista *Tres* que “*el nuevo sistema político hace que el partido que no participe en la segunda vuelta quede afuera*”, como si la asignación de bancas parlamentarias no tuviera la menor importancia. Tal vez piense que una legitimación de más del cincuenta por ciento le dé al Presidente un aval frente a la opinión pública que le sirva para presionar al Parlamento. Esta posibilidad existe, indudablemente, pero traería más perjuicios que beneficios porque podría desencadenar conflictos de poderes (quizás induzca a la oposición -también de los partidos tradicionales, ¿por qué no?- a utilizar los plebiscitos con más frecuencia). Pero igualmente podría ocurrir lo contrario: que se generalizase la idea de que, a pesar de tanto aval, el Presidente es impotente para gobernar; el régimen de segunda vuelta podría crear la ilusión de un presidente fuerte que no se correspondería con los hechos. Las dos variantes desprestigiarían al Parlamento precisamente por representar las diferencias y los fraccionamientos, que están tan desacreditados.

Otra razón que se adujo fue que la reforma promovería la formación de coaliciones, dado que ninguno de los candidatos alcanzaría la mayoría necesaria. Este argumento resulta paradójico a la luz de dos gobiernos de coaliciones consecutivos conformados bajo la antigua ley electoral. No obstante, son necesarias algunas precisiones. Los sistemas presidencialistas -como el nuestro-, no le dan encuadre institucional a las coaliciones, lo que sí ocurre en la mayoría de los regímenes parlamentaristas (la excepción es la variante de Westminster). En los sistemas parlamentaristas los gobiernos de coalición sólo pueden mantenerse en ejercicio si las mismas se conservan intactas a lo largo del período; de lo contrario caen. En cambio, en sistemas como el nuestro el presidente puede romper la coalición de gobierno en todo momento sin mayores consecuencias (no se puede destituir al presidente o reducir su mandato a menos que cometa delitos graves). Por esta razón el *ballotage* no institucionaliza los acuerdos de gobierno; solamente permite acuerdos puntuales, es decir, compromisos que no están asegurados institucionalmente. Si se cumplen o no dependerá de la buena voluntad de las partes.

Pero la reforma agrega una distorsión importante respecto de la situación anterior: dado que los acuerdos deben establecerse *contra* el otro candidato más votado, y no con el socio idóneo, el *ballotage* induce a pactar con el diablo. Hasta ahora pocos se han atrevido a analizar lo que ocurriría si la segunda vuelta se dirimiera entre los dos partidos tradicionales: ¿se abstendrían de negociar con el Frente?, ¿persistirían en esa postura si el Frente anunciara su intención de volcar sus votos en favor de uno de los dos candidatos? En el pasado las coaliciones de gobierno podían formarse entre las fracciones más afines. En el futuro la reforma obligará a los candidatos a forjar alianzas espurias si las circunstancias los obligan.

Piedras en el camino

La reforma nació torcida. El simple hecho de que haya sido aprobada por un margen tan reducido la retrata de cuerpo entero. Es cierto que la legislación vigente admite esos márgenes, pero si los partidos tradicionales hubieran demostrado la sensibilidad política que los caracterizó en el pasado -y no estuvieran pasando por una crisis de confianza en sí mismos y en su capacidad de convocatoria-, deberían haber impedido que una reforma, que decide nada menos que las reglas de juego que rigen nuestra vida democrática, se hubiera aprobado prácticamente contra la mitad de la población. John Rawls dice que los principios constitucionales deben expresar todo aquello que tiene constantemente en común un gobierno constitucional y su oposición legítima (lo cita Pablo da Silveira en “La inflación constitucional y sus riesgos”, Cuadernos del Clach n.º 67). Nada más lejos de lo que ocurrió en nuestro país cuando se aprobó la reforma.

Ya es un problema que sean tan bajas las barreras para aprobar reformas constitucionales (a muchos analistas extranjeros que visitan Uruguay les llama la atención que no haya diferencias entre las mayorías que se requieren para abolir una ley o reformar la Constitución). Pero asuntos tan sensibles como las reglas de juego democráticas sólo deberían modificarse mediante consensos considerablemente más amplios que los que actualmente establece la Constitución, cuestión que podría imponerse por costumbre. En otras circunstancias tal vez hubiera ocurrido. Pero en este caso primó la urgencia debido al susto que pasaron blancos y colorados, durante un breve lapso de horas, cuando pensaron que el Frente había ganado las elecciones nacionales de 1994. ¡Cuánta agua tuvo que correr para que se olvidaran de su aversión histórica al *unicato*!

Si algo necesitaba la izquierda tradicional para confirmar su desconfianza hacia el sistema político, nada mejor que la reforma aprobada. Como se dijo arriba, los partidos de izquierda consideraban que el sistema electoral servía para perpetuar a los partidos tradicionales en el gobierno. En épocas más recientes descubrieron las ventajas del doble voto simultáneo para conformar el Frente (aunque la teoría no siempre va acorde con los hechos: muchos frenteamplistas no sabían si apoyar la reforma para eliminar el doble voto simultáneo -que muchos confundían con la Ley de Lemas-, o rechazar un mecanismo que alejaba al Frente del gobierno). La reforma electoral les confirmó la idea de que nuestro sistema político está montado para obstruirles el paso. Ahora sólo se puede ganar por *knock out*.

Una victoria pírrica

Aunque parezca un contrasentido, esta es una victoria histórica de la izquierda. Hasta hace muy pocos años, la visión de un país dividido en polos inconciliables era casi exclusivamente suya. Para la mayor parte de la izquierda no existían diferencias de fondo entre los dos partidos tradicionales.

Pero el crecimiento irrefrenable del Frente y el temor de que llegue al gobierno, llevó a estos partidos a pensar en los mismos términos que la izquierda y a dividir el terreno (si se quiere *su propio terreno*) en dos partes opuestas e irreconciliables, subordinando sus diferencias a la derrota del rival. La pregunta es si les rinde beneficios.

Creemos que no por varias razones. En primer lugar, si las elecciones se dirimen entre el Frente y los partidos tradicionales, muchos electores se van a acostumbrar a no ver diferencias entre blancos y colorados. En segundo lugar, fortalecen al Frente porque lo transforman automáticamente en la referencia opuesta (algo que ya ocurría antes de la reforma y explica en parte su crecimiento; el mejor modo de hacerle propaganda es hablar continuamente del peligro que representa; el Frente sólo necesita repeler los ataques y desmentir las acusaciones, del resto se encargan los demás^[1]). En tercer lugar, el tiro les puede salir por la culata. La reforma está pensada para que el Frente pierda. Pero, ¿qué ocurre si gana, si no en éstas, en las siguientes elecciones? En tal caso, ¿no habría sido mejor que lo hiciera bajo el régimen anterior? Ganar las elecciones presidenciales por mayoría relativa tiene un efecto de contención distinto que hacerlo por mayoría absoluta.

Probablemente un triunfo de estas características tampoco lo beneficiaría al Frente. Muchos votantes pensarían que llegó el cambio tan largamente añorado y podrían desbordarlo con exigencias desmedidas, como le ocurrió a la Unidad Popular en Chile.

La inclusión y sus frutos

En descargo de los partidos tradicionales cabe señalar que cometieron un error frecuente de partidos democráticos que se sienten amenazados por partidos nuevos que no comparten sus presupuestos. En lugar de atrincherarse y repeler al intruso -sobre todo si cuenta con un apoyo electoral fuerte-, lo conveniente en estos casos es hacer todos los esfuerzos por atraer a estas fuerzas hacia las instituciones democráticas y acompañarlas en el lento proceso de reformulación de sus postulados. Esto se logra remarcando los puntos de acuerdo, estableciendo compromisos limitados, afirmando los principios liberales como fundamento de la convivencia democrática, separando la paja del trigo (que no equivale a enquistar a una parte del Frente contra la otra), distinguiendo entre lo posible y lo imposible, comprometiéndolas a respetar los acuerdos internacionales, etcétera. Sobre todo, lo que importa es transmitir la idea de que las mayorías democráticas no son ni deben ser permanentes, y lo que una decide hoy mañana lo revoca otra, y así sucesivamente. Este fue el largo camino que le tocó recorrer a la socialdemocracia europea y a otros partidos de izquierda.

Se dirá que mucho de esto se ha intentado. Sin embargo, no se puede comprometer a la izquierda a compartir responsabilidades democráticas y, simultáneamente, acorralarla contra las cuerdas.

Hay un ejemplo de cómo se pudo haber actuado de la manera que se describe arriba. En 1993 el Parlamento aprobó una ley de privatización de empresas públicas que un grupo de ciudadanos intentó impugnar sin éxito. Entonces apareció Tabaré Vázquez en escena y volcó todo su prestigio para realizar un plebiscito que revocó partes de la ley. El incidente sirvió para demostrar el enorme poder de convocatoria y movilización del Frente.

El presidente Lacalle se atuvo a la letra escrita y perdió. Sin embargo, podría haber hecho las cosas de otra manera y salir doblemente triunfador de la contienda. Por ejemplo, podría haber censurado públicamente al Frente y a Vázquez (y de paso también a Sanguinetti, que se subió al carro del Frente) por no haber depositado en el Parlamento el mismo esfuerzo utilizado en la campaña del plebiscito y, al mismo tiempo, ofrecerles retornar a ese ámbito para hacerle a la ley los retoques que fueran necesarios. Este camino era a todas luces mejor que perder tiempo y dinero en una campaña dañina para el prestigio de las instituciones representativas. No había ninguna razón de fondo para que el gobierno no aceptara excluir de la ley algunas de las cláusulas más cuestionadas. Además, hubiera impartido una lección de responsabilidad democrática de cara a la opinión pública.

Arriba se habló de las coaliciones de gobierno en los sistemas presidencialistas. Aquí cabe añadir otro efecto de las mismas que incide de manera perniciosa sobre la inclusión política porque limita los márgenes de acción parlamentaria de la oposición. La función de las coaliciones es facilitar el apoyo parlamentario a las iniciativas del gobierno. La consecuencia negativa es que impiden que se formen mayorías ocasionales en las que podría participar la oposición. Esto le daría la sensación de que, si bien no puede implementar el conjunto de su programa, consigue introducir partes del mismo en otras iniciativas de leyes.

La mirada en el espejo

Hay un punto más que merece ser tratado. A mucha gente le exaspera la visión conspirativa de la izquierda, su descreimiento en las instituciones liberales, su convicción de que todo político conservador es potencialmente corrupto, su certeza de que es imposible llegar a acuerdos duraderos con el bando contrario sin hipotecar sus principios más sagrados. Pero este pesimismo va acompañado muchas veces de un sincero sentimiento de solidaridad con los más pobres y los más necesitados. No se quiere decir con ello que Luis Alberto Lacalle o el presidente Sanguinetti no compartan una preocupación similar. Sin embargo, nadie hace bandera de estos temas como la izquierda. Una sociedad políticamente sana debería apreciar que haya quien la interpele sobre estos asuntos, que aguijonee a los demás partidos para recordarles que hay gente que clama por soluciones urgentes, que no disculpe transgresiones a la ética de los funcionarios públicos, que inspire una desconfianza hacia los políticos que también puede ser legítima y saludable, que nos obligue a ser ciudadanos más atentos y responsables. Esta debería ser la verdadera contribución histórica de la izquierda.

[1] Por la razón que sea Tabaré Vázquez no se cansa de buscar coincidencias con algunos líderes blancos y colorados. Por su parte Seregni declaró: *“Yo borré de mi diccionario político la palabra perder; puedo ganar el gobierno o no ganar. Pero de cualquier manera quiero participar y de cualquier manera el gobierno tiene que ser de acuerdos”* (Tres, 19 de marzo). Estos gestos conciliadores dan réditos en un país acostumbrado al diálogo.